

**editorial**

## PERSECUCION A LA IGLESIA

Había indicios, tímidos pero significativos, de que el gobierno estaba buscando la paz con la Iglesia, cuando, en ausencia del Presidente Romero y contradiciendo lo que él había declarado en México, los cuerpos de seguridad llevaron a cabo el absurdo y cruel operativo del 20 de enero en los locales de "El Despertar". Para justificar lo que a todas luces resultó un despliegue innecesario de fuerza y un exceso de salvajismo, emitieron un comunicado tejido de mentiras y acusaciones falsas contra los miembros de la Iglesia directamente involucrados y los implícitamente concernidos. El recurso a unos agresores que huyeron, cuya existencia y actuación nadie podrá probar jamás, es una justificación que está sustentada solamente por la palabra, tantas veces desmentida, de los cuerpos de seguridad.

Además de repudiar con toda energía este nuevo crimen de los cuerpos de seguridad y de reafirmar nuestra profesión de fe en la no violencia como el único medio cierto para superar la violencia estructural y la coyuntural, nos adherimos al pronunciamiento en que el Arzobispado y los Sacerdotes de la Arquidiócesis exigen, con un grito de "Basta ya", que se ponga un fin a la persecución al Pueblo de Dios y a sus Pastores, es decir, a la Iglesia. Por otra parte la inspiración cristiana de nuestro trabajo universitario nos impone en esta ocasión la doble tarea de denunciar la iniquidad de los hechos y de buscar constructivamente una manera de evitar que estos hechos se repitan.


Es evidente que la persecución a la Iglesia continúa. Se le persigue, en primer lugar, **de palabra** desde la prensa, radio y televisión nacionales, que dedican buena parte de sus energías, recursos e influjo a combatir incansablemente a Monseñor Romero, los sacerdotes que le siguen y todo lo que ellos representan. Persiguen a la Iglesia las personas de la clase dominante que en toda ocasión posible atacan, desde una postura emotiva y poco objetiva, al Arzobispo, y a casi todos los sacerdotes, porque ya no pasan por alto la situación de privilegio, y de injusticia que mientras beneficia exageradamente a unos pocos hace la vida muy dura para las mayorías. También persigue a la Iglesia el Gobierno, cuando, solo o aliado con los grupos oligárquicos y sus medios de difusión, calumnia y denigra a la persona del Arzobis-

po y a los sacerdotes comprometidos, hostiga a organizaciones cristianas y reprime a personas cuyo compromiso cristiano les lleva a opciones políticas opuestas al Gobierno.

Una forma muy importante y cargada de consecuencias de esta persecución verbal y escrita es el adoctrinamiento sistemático que se hace a los miembros de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad para fomentar en ellos el odio contra los sacerdotes, religiosos y simples fieles que, por fidelidad a Cristo, trabajan, de la manera que a cada cual le corresponde, por quitar de nuestra sociedad el pecado estructural de injusticia. Desde posiciones de autoridad les dicen y repiten hasta la saciedad que estos sacerdotes y fieles comprometidos son comunistas —como si esto fuera ya bastante excusa para negar los derechos humanos a una persona—; son enemigos de la Constitución, de la Ley y el Orden y de la misma Institución de la Fuerza Armada. Este adoctrinamiento ha conseguido confundir totalmente los conceptos y los criterios que harían a los miembros del ejército y de la Policía capaces de distinguir lo que es cambio estructural no violento, lo que es denuncia racional y justa, lo que es compromiso político patriótico, de la revolución armada, de la subversión total de los principios y valores de la convivencia, e, incluso, de la destrucción de la Institución de la Fuerza Armada.

Esta persecución de palabra es el requisito necesario y, muchas veces, suficiente para que la persecución a la Iglesia sea también de hecho; de manera que los que fomentan la primera son también responsables de los efectos de la segunda. No deja de ser hipócrita la actitud de los que, atacando de palabra y por escrito a los obispos, sacerdotes y fieles que luchan por la justicia, se escandalizan de las brutalidades que personas menos cultas y competentes hacen con sacerdotes y fieles.





No hay por qué asombrarse de que unos cuerpos de seguridad, no muy bien pertrechados intelectual y moralmente y sometidos a un adoctrinamiento sistemático de odio contra ciertos sacerdotes y fieles por los medios de comunicación, y por todas las personas que para ellos representan la autoridad, cometan errores y abusos tan crueles, tan vergonzosos, y tan embarazosos para el Gobierno como la masacre de San Antonio Abad.

El Gobierno por su parte se esfuerza en demostrar que no hay persecución a la Iglesia, haciendo ver que hay división en ella, que la Iglesia goza de toda su estima y su respeto y es sólo una parte pequeña, la compuesta por fanáticos, disidentes, politizados y subversivos la que es tratada como se merece, de acuerdo a las leyes del país.

Esta caricatura no engaña a nadie, y menos después de la procesión del 30 de enero por las calles de San Salvador. Aunque la división de opiniones dentro de la Conferencia Episcopal es una triste realidad, el Pueblo de Dios con sus sacerdotes sienten y actúan en su abrumadora mayoría con la corriente principal de vida eclesial que surge del Vaticano II y de Medellín. Aunque los obispos no hablen y actúen de acuerdo, no por eso se puede afirmar que hay dos Iglesias: una que es fiel a la oligarquía y el gobierno y en recompensa goza del favor de éstos y otra que, por denunciar sus abusos y revelar los vicios de la estructura que les sustenta, puede ser perseguida de palabra y de obra. Como recordó Juan Pablo II en la República Dominicana la Iglesia es una; y si es una sola Iglesia, no se puede pretender que calumniar, golpear, y asesinar a una parte no implica necesariamente persecución al todo inseparable de este cuerpo que es la Iglesia.

Para avanzar en la superación de esta situación debemos preguntarnos por qué se oponen, más aún, se sienten amenazados por la corriente principal de vida eclesial latinoamericana la oligarquía, el Gobierno y la Fuerza Armada.

En primer lugar debemos reconocer que en América Latina ha habido algunos sacerdotes, seminaristas, religiosas y catequistas que, frustrados y desesperados por no encontrar ninguna respuesta efectiva al mensaje no violento del Evangelio en favor de los pobres y oprimidos, optaron por métodos más expeditivos y algunos incluso se inscribieron en la guerrilla. Sin embargo éstos han sido muy pocos y en ningún caso el fenómeno ha tenido la importancia suficiente para determinar la orientación de ninguna Iglesia local; cuanto menos la de una Conferencia Episcopal o Conferencias regionales. Es pues desproporcionado buscar en los casos aislados de sacerdotes que optaron por métodos violentos una justificación emocional y racional para atacar a la Iglesia.

La raíz del problema está en que la Iglesia exige cambios en las estructuras socio-económicas de nuestros países como una etapa indispensable en la implantación del Reino de Dios, que es



lo que en definitiva le interesa. Hay personas que no quieren éstos ni ningún cambio; otras que tolerarían cambios que no llegaran al fondo de las situaciones; todas estas personas perciben los cambios que exige la Iglesia como contrarios a sus intereses materiales, a sus privilegios de clase, a la continuación de su ejercicio del poder. Sienten que ese Reino de Dios, al pedirles una conversión que tiene efectos intramundanos, materiales y políticos, es una amenaza a su actual posición social y se aferran a otro concepto del Reino de Dios, que sólo tiene consecuencias espirituales y hasta después de la muerte. Estas personas, mientras no cambien de corazón, seguirán viendo, con razón, en la predicación del Jesús histórico y del Reino de Dios en la Historia una amenaza personal y concreta a su privilegiada posición social y seguirán oponiéndose a la Iglesia que lleva a cabo esta predicación.

Por otra parte, algunas personas basan su oposición y aun odio a la Iglesia en una percepción equivocada de las exigencias que la Iglesia les hace a ellos en concreto. Estas exigencias les aparecen, o se las presentan, totalmente distorsionadas, exageradas y falseadas de manera que se ven interpelados y amenazados por lo que son en realidad fantasmas. Este es el caso de muchos capitalistas modernos, que ven en la Iglesia un enemigo de toda propiedad privada, lo cual es ciertamente falso; éste es el caso de los que temen que la predicación de la Iglesia reduzca la división del trabajo y la jerarquía que en ésta debe haber a una extrema igualdad comunista, lo cual ni es en sí posible, ni la Iglesia pretende en absoluto; éste es el caso de muchos jefes, oficiales de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad que han sido malignamente convencidos de que la Iglesia pretende eliminar estas instituciones, lo cual es plenamente falso y no se puede deducir de las críticas que la Iglesia hace a una forma determinada de ser y de actuar de estas instituciones.

Sólo perciben correctamente a la predicación de la Iglesia como una amenaza real y objetiva quienes, contra todo derecho y justicia, buscan su lucro personal, la satisfacción de su ambición de poder o cualquiera que sean sus objetivos en la vida, a costa del sufrimiento causado o permitido de los demás. La Iglesia sí lucha por eliminar estas conductas y estos actos aunque, claro está, incluso en esta guerra declarada su arma es la Palabra de Dios y no la espada de la violencia.

La persecución al Pueblo de Dios tiene que cesar; tiene que cesar a todos los niveles y en todas sus modalidades si se quiere que el Pueblo y la Iglesia sean factores eficaces en el proceso de instaurar y consolidar la democracia y en toda la labor de diálogo y de pacificación que debe precederla. Sin la Iglesia, hoy en El Salvador, no se puede construir una paz durable.

31 de enero de 1979.

